

Gobiernos progresistas en América Latina

Análisis de experiencias recientes

MÉXICO - BOLIVIA - BRASIL - ARGENTINA - COLOMBIA - CHILE

Jairo Estrada Álvarez (Coord.)

Beatriz Stolowicz

Hugo Moldiz Mercado

Luiz Filgueiras

Gabriela Roffinelli

Juan Carlos Gómez-Leyton

Espacio Crítico
Ediciones



MÉXICO:
Duros tiempos de transformación

Beatriz Stolowicz

Estamos a unas semanas de que se cumplan cinco años del gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO. Habían transcurrido cinco meses de gobierno cuando, en mayo de 2019, compartí con la Maestría de Estudios Políticos Latinoamericanos en la Universidad Nacional de Colombia mi análisis titulado “Rebelión electoral y Cuarta Transformación en México”. Allí se encuentra el prólogo contextual del arribo a este intenso proceso. Allí también se encuentran algunas inquietudes y preguntas abiertas tras aquellos primeros cinco meses de gobierno. Que esta autora pudo responderse (y corregir) al ir identificando, con el tiempo, algunas claves de la estrategia desplegada.

Algunas claves

Política-tiempo-economía-política. En esta fórmula que propongo podría condensarse la complejidad y dialéctica de la estrategia y conducción de este proceso.

Lejos de asumirse “la correlación de fuerzas como excusa”, se asume la construcción de fuerza política para debilitar o eliminar los obstáculos a la transformación. Lo que se va gestando en un doble plano: con una constante labor del presidente desde la diaria conferencia de prensa matutina (“las mañaneras”) de pedagogía política, intelectual y moral, de denuncia documentada sobre lo existente heredado, sus causas y sus responsables, sobre lo necesario a lo que se aspira exhibiendo los obstáculos; y, simultáneamente, ejecutando lo máximo posible de cambios en esas adversas condiciones, cuyos iniciales resultados positivos van legitimando las siguientes batallas para hacerlos avanzar.

El manejo no lineal del tiempo es un componente central de la estrategia, no siempre predecible en su ejecución. Lo que tanto confunde si se tiene una mirada lineal o episódica de los procesos.

En su cotidiana y amplia comunicación, el manejo del silencio es uno de sus componentes. Hasta que llega un momento de hablar cuando hay acciones o decisiones que exhiben fuerza o logros. Que a veces introduce el presidente de manera extemporánea como anécdotas, en las que cuenta entresijos de tensas negociaciones o disputas ya resueltas, como suele hacer respecto a las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. En ocasiones son dichos que dan atisbos, casi siempre enigmáticos, de asuntos en proceso o de escenarios por venir.

Y están los momentos en que hay explicitación de la lógica estratégica, con sentido pedagógico, con frases del presidente que son ya verdaderos aforismos: “política es tiempo”; “política es tener que optar entre inconvenientes”; “política es priorizar”, entre muchos otros. El presidente coloca la agenda de debate público, en particular a la derecha.

Pero las *mañaneras* son mucho más que eso, pues se convierten en una suerte de asambleas, que el presidente caracteriza como “de diálogo circular”, a las que llegan denuncias, solicitudes o reclamos de la población a través de los periodistas. Que cuando implican a las acciones del gobierno federal, son tomadas para hacer de inmediato la detallada rendición de cuentas a cargo de los responsables de la gestión correspondiente. Lo que se refuerza con el contacto permanente del presidente con la población en recorridos por todo el país: “territorio, no escritorio” es otro de sus aforismos. Esta es una de las dimensiones del principio de “hacer lo público cada vez más público”, “lo público, lo que es de todos”.

Otra clave en la construcción de fuerza política para los cambios es el modo como se enfrenta al *golpismo híbrido* de la derecha. Denomino así a un abanico de acciones simultáneas de actores formales e informales del sistema político. De las de actores formales, destaca la *guerra sucia* permanente desde los medios de comunicación, con montajes y mentiras de toda laya, operada por periodistas, intelectuales y empresarios, con sus inocultables nexos partidarios. Así como la acción permanente del Poder Judicial que abarca desde: otorgar miles de amparos, hasta en 24 horas, para bloquear todas las acciones del gobierno; la liberación de delincuentes del “crimen organizado y del crimen de cuello blanco” (López Obrador *dixit*) apresados por este gobierno; la injerencia de la Suprema Corte de Justicia en las decisiones de facultad exclusiva del Poder Legislativo cuando refuerzan las acciones de cambio; hasta la censura que el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Suprema Corte le impusieron recientemente al presidente prohibiéndole hablar de ciertos temas y personas (incluso mencionar la palabra “transformación”), y el intento de uno de sus ministros de promover su destitución. En tiempos de elecciones parlamentarias intermedias y estatales (que atraviesan todo el sexenio), las anteriores se articulan de manera informal con acciones para crear pánico entre la población como sabotajes al Metro de la Ciudad de México, violentas tomas paramilitares de poblaciones y carreteras que pretenden provocar reacciones gubernamentales que conduzcan a masacres (infructuosamente), entre otras, además de la situación de más larga data que comentaremos.

En las *mañaneras* se informa a la población sobre esas acciones identificando a los actores y desmontando mentiras. Pero no en un tono defensivo, sino presentándolo como prueba de cómo “la derecha, los conservadores, se quitan las máscaras” (López Obrador *dixit*). Los aludidos vociferan contra la “polarización provocada por el presidente”, a lo que éste responde serenamente: “no es polarización, es politización”. A la que define, como marca distintiva del proyecto de la Cuarta Transformación, como “la revolución de las conciencias”. Con sus denuncias sobre el accionar del Poder Judicial, afirmando que está “al servicio de los privilegiados”, da contenido empírico a la pedagógica labor para que se distinga entre gobierno y Estado, de la necesidad de mayorías más amplias para poder transformar a todo el Estado, para construir “una verdadera democracia, que tiene que ser participativa” (por su iniciativa, se introduce en la Constitución la revocación de mandato presidencial). A ello convoca al *pueblo* como sujeto de la transformación. Cada ataque y bloqueo de la derecha –pese al inmenso tiempo y recursos que el gobierno debe destinar para enfrentarlos– es desnudado y socializado como un medio para la politización. Y por ello, al abordarlos incansablemente, el presidente suele decir, sonriendo: “No podemos quejarnos, vivimos tiempos interesantes”.

La intensidad de la batalla política tiene su propio respaldo en la intensidad de la acción del gobierno para revertir la destrucción del país que se recibió el 1 de diciembre de 2018. Habían transcurrido tan sólo 13 meses cuando sobrevino la pandemia de Covid-19. Esos dolorosos dos años, empero, fueron acicate para acelerar cambios.

Desmontando el Estado neo-oligárquico

Esto no es sólo una descripción de acontecimientos; es la caracterización que me parece más adecuada del contenido del proceso de transformación actual en México.

Desde hace años he venido caracterizando al Estado *para y de* la reestructuración capitalista neoliberal como neo-oligárquico, con la fusión de poder económico y poder político, que el gran capital administra de manera directa y a través de sus funcionarios. El interés y objetivos del gran capital son la única razón de Estado. Al que usa patrimonialmente para transferir inmensa riqueza social para sus ganancias, y para ese objetivo se moldea el orden jurídico. Se golpea a los trabajadores y sus sindicatos, al tiempo que se

construye un entramado de “organizaciones intermedias de la sociedad civil” financiadas por empresarios, que cumplen tareas de control social de aspecto amigable y de reconfiguración ideológica.

El desmonte del Estado neo-oligárquico es eje del proyecto de transformación como *medio* para los objetivos de *igualdad y justicia para todos*; que tiene como principio de acción: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Y como necesaria transformación cultural: “erradicar el clasismo y el racismo”. Sin ser un proyecto anticapitalista, se enfrenta decididamente al gran capital.

Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pero formado profesional y políticamente entre comunidades indígenas y campesinas¹, López Obrador explica a los sectores populares el Estado neo-oligárquico (o “neoporfirista”²) con frases como: “El gobierno se convirtió en un comité de administración al servicio de una minoría rapaz”, o “El gobierno fue secuestrado por una banda de rufianes”, que “por eso son potentados, no porque sean empresarios capaces”.

Debe tenerse presente que significa enfrentar a los mismos grandes empresarios, sus medios de comunicación, sus políticos y sus intelectuales que desde hace dos décadas emprendieron la guerra sin cuartel contra López Obrador: en 2005, su desafuero (destitución) siendo Jefe de Gobierno de la capital, por iniciativa del presidente Vicente Fox del Partido Acción Nacional (PAN), con aval de la Suprema Corte y aprobado en el Congreso federal también con los votos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que por las grandes movilizaciones fue desistido por Fox; el escandaloso fraude electoral en 2006 que impidió que asumiera la presidencia que ganó; financiaron la campaña sucia y la compra de votos en 2012 para impedir su triunfo; lo que no lograron pese a la potenciación de sus acciones en 2018 (53.2 por ciento de los votos en única vuelta, más de 30 millones).

1. Oriundo de un pequeño pueblo de Tabasco, Tepetitán, al terminar la carrera en la capital asumió la dirección del Instituto Indigenista en su estado. Además de su vasto conocimiento histórico y literario, su profundo conocimiento de la cultura popular se forjó en las siguientes décadas recorriendo varias veces todos los municipios del país; alimentada en ellos es que realiza su constante tarea de pedagogía política.

2. En referencia al dominio oligárquico con la dictadura de Porfirio Díaz durante 30 años, derrotada por la Revolución Mexicana que estalla en 1910.

El Estado neo-oligárquico se construyó demoliendo desde 1992 la orientación social y nacional de la Constitución de 1917 emanada de la Revolución Mexicana. La reforma de su artículo 27 promueve la entrega del territorio al capital, así como la mercantilización de la propiedad social de la tierra (ejidos). La reforma al artículo 123 sobre derechos de los trabajadores legaliza su liquidación, entre otros artículos reformados. En ese sexenio de Salinas de Gortari se privatizaron mil empresas públicas de un total de mil cien. En 1994 se estableció la autonomía del banco central³ (Banco de México) para entregar su conducción al capital financiero. Dos años después, el gobierno de Zedillo “rescató” financieramente a esas empresas privatizadas, especialmente los bancos, mediante deuda pública, cuyo pago de intereses desde entonces alcanza una cifra billonaria y faltarían 70 años para pagar otro tanto. El panista Felipe Calderón, impuesto presidente en 2006 tras el fraude, profundizó el entreguismo y gestó un “narco-Estado” (López Obrador *dixit*) de la mano de la Iniciativa Mérida con Estados Unidos de 2007. En 2013, bajo el gobierno del priísta Peña Nieto, el parlamento formalizó jurídicamente la privatización de los energéticos, dando el golpe de gracia a las dos únicas grandes empresas públicas remanentes: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que desde años antes habían sido debilitadas preparando la privatización⁴. Durante esos 35 años, como dirigente político López Obrador encabezó la denuncia y las movilizaciones contra esas y otras acciones, documentando en dos decenas de libros lo que él califica como saqueo.

Para enfrentar a esta oligarquía, como la denomina el presidente, puso en movimiento una compleja estrategia para reducirle su fuerza de ataque. Sería muy revelador reconstruir cronológicamente sus vericuetos (de lo que hoy ya podemos identificar), pero en este breve espacio sólo podemos ilustrar algunos resultados. En efecto, tal como sostuve en mayo de 2019, en el primer año de gobierno y tras haber cancelado el ecocida y escandaloso negociado de la construcción del aeropuerto sobre el Lago de Texcoco, el presidente buscó reducir su furiosa oposición mediante el acercamiento con un grupo de los grandes empresarios; los invitó a formar un Consejo Asesor e incorporó al gabinete a algunos identificados con ellos, que después fue sustituyendo. Me equivoqué al decir que se trataba de “una alianza firme”. Pero siempre mantuvo

3. Es de llamar la atención que, en Brasil, la autonomía del banco central se establece recién en 2021, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro.

4. Además, Felipe Calderón liquidó en 2009 a la estatal Luz y Fuerza del Centro dejando en el desempleo a más de 40 mil trabajadores, cuya generación fue entregada a privados.

el llamado a los grandes empresarios al diálogo, a hacer acuerdos; al tiempo de ampliar la capacidad de presión sobre ellos mediante la denuncia pública de la información que se iba procesando y con el creciente apoyo social a las políticas gubernamentales. Con esa fuerza construida, tomará decisiones fuertes cuando se incumplan los acuerdos.

La tarea prioritaria y de principios –así comunicada a la población– es eliminar la corrupción en el gobierno. “La corrupción, como las escaleras, se barre de arriba a abajo”, dice el presidente. La “austeridad republicana” consiste en rescatar los recursos públicos “que son de todos”, apropiados por la élite gubernamental-empresarial, para redirigirlos a financiar programas sociales para enfrentar la pobreza. El aforismo “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, conforme pasan los meses va representándose cuantitativamente. Las cifras hechas públicas ilustran el carácter faraónico de la “burocracia dorada” mexicana, que tiene de los ingresos más altos del mundo. Una de las acciones contra el patrimonialismo consiste en bajar los salarios de los altos funcionarios, empezando por el presidente que lo reduce a 125 mil pesos (unos 6.5 mil dólares), y la reforma constitucional que norma que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Pero esto no aplica (por decisión de la Suprema Corte de Justicia) para la miríada de organismos autónomos, un Estado dentro del Estado, el bunker construido por la neooligarquía, que está en funciones por períodos más largos que el Ejecutivo y el Legislativo y es inmune a los cambios de orientación política en el sistema representativo. Sólo para dar un ejemplo: un ministro de la Suprema Corte de Justicia tiene, actualmente, ingresos mensuales equivalentes a 35 mil dólares, aparte de increíbles asignaciones en especie; apenas menor es el ingreso de los directivos del INE, los consumidores de los fraudes. La austeridad republicana se aplica también a los gastos corrientes del gobierno, que eran igualmente faraónicos, y que exhiben a las contrapartes empresariales que los proveían. Se cancelan compras gubernamentales de latrocinio. Se buscan los resquicios legales para ejercer acción penal. La *guerra sucia* cobra vuelo.

La emergencia social de la pandemia crea un nuevo escenario que legitima la acción gubernamental en el enfrentamiento al gran capital para revertir las privatizaciones y los financiamientos estatales a sus ganancias privadas. La clave estratégica es informar detalladamente sobre esos negociados; y con un complejo manejo del tiempo dar a conocer a sus beneficiarios: en ocasiones sin dar nombres hasta que las negociaciones con esos empresarios son exitosas y entonces el presidente los nombra para *agradecerles* su cooperación; en otras

ocasiones, da a conocer los nombres para forzar la negociación. O para explicar las medidas tomadas cuando no cumplen con lo acordado. Han tenido que transcurrir estos años para identificarlo.

Por ejemplo, desde marzo de 2020, denunciando el estado de destrucción del sistema público de salud que se recibe, se informa que se han cancelado los contratos de latrocinio en la venta al Estado de medicamentos (hasta caducos) y equipo médico, un negocio equivalente a 10 mil millones de dólares anuales monopolizado por 6 empresas comercializadoras, una de ellas propiedad de un connotado político priísta dueño de un medio de comunicación, de los más beligerantes. Se informa también sobre los negociados en la construcción de hospitales (algunos inexistentes) y en el desmantelamiento vía subrogaciones, con la denuncia sobre los “leoninos contratos de las asociaciones público-privadas”. Se denuncian, asimismo, las APP en cárceles⁵, en carreteras. Por ejemplo, en septiembre de 2023, el gobierno da a conocer que rechaza la oferta empresarial de bajar lo que cobran en APP por nueve hospitales y les propone comprarlos. Según el avalúo gubernamental, las empresas invirtieron unos 5,200 millones de pesos (mdp) en esos nueve hospitales, que es menor incluso a los 5,600 mdp anuales que se les paga por su uso, con lo que el Estado les terminaría pagando 93 mil mdp., 16 veces más. El costo de la construcción de algunos hospitales era de mil mdp., pero cobraron 20 mil mdp. Unas semanas después, deja saber los nombres de todos los empresarios (que también están en APP en cárceles, en energéticos), cuando tres de ellos aceptaron venderlos.

En la pandemia el presidente denuncia que los grandes empresarios le piden apoyos financieros, pero “no vamos a rescatar a los de arriba, sino a los de abajo”. Además de la austeridad republicana, se emprende la batalla de cobrarles impuestos. El presidente se había comprometido a no aumentar impuestos en los tres primeros años de gobierno, pero que eliminaría las condonaciones y devoluciones a las grandes empresas nacionales y extranjeras. Lo que estableció por decreto presidencial el 21 de mayo de 2019 (contra el cual se concedieron inmediatamente 45 amparos judiciales); pero que en marzo de 2020 se logró convertir en norma constitucional (reforma al art. 28). Además, el Congreso federal establece que a partir de junio de 2020 las plataformas digitales tendrán que pagar impuestos.

5. Denuncia que el Estado paga el equivalente a 250 dólares diarios por cada preso, y que al cabo de 20 años de esa erogación las cárceles quedarán en manos de esos empresarios privados.

Pero más que la fuerza legal, tuvo más peso el exhibir ante la población que, mientras que los que viven de su trabajo pagan impuestos, los grandes empresarios no. Con un régimen fiscal *a modo*⁶, aun así debían inmensas cantidades al fisco. Desde abril de 2020, en la *mañana* se dan cifras de grandes deudores, al tiempo que se deja saber que el presidente se reúne con algunos. Y cuando comienzan a pagar, los nombra para *agradecerles*. Conforme la fiscalización avanza, se actualizan las cifras⁷ y se dan a conocer listas nominadas de deudores. Para hacer que esas inmensas cifras fueran inteligibles para la población, el presidente las compara con las necesidades inmediatas que podrían financiar (otro millón más de apoyos a pequeños productores y comerciantes, contratación de personal de salud, vacunas, becas, etc.).

En cuatro años y medio (2019-primer semestre de 2023), mediante el avance de la fiscalización a los llamados Grandes Contribuyentes se cobran adeudos por el equivalente a 43 mil millones de dólares (mdd.); deben otros 31 mil mdd., de los cuales 60 por ciento tienen amparos, que el gobierno litiga con constancia. Y va cambiando la composición de la recaudación: en el primer semestre de 2023, los Grandes Contribuyentes (que son el 0.02 del total) aportan el 49 por ciento de la recaudación⁸; el impuesto sobre la renta (ISR) pasa a ser el 70 por ciento de la recaudación y el IVA el 30 por ciento (antes era el 60 por ciento).

6. Raquel Buenrostro, por entonces directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), explicaba que por el régimen fiscal heredado, "las grandes empresas en promedio pagan 2.1% de sus ingresos, y algunos muchísimo menos, como los sectores acerero, alimentario, automotriz, energético, farmacéutico, financiero, minero, retail (ventas al por menor) e hidrocarburos. Con los beneficios fiscales establecidos desde hace 20 o 30 años, en el caso del sector automotriz, por cada peso de IVA que paga, el fisco le regresa tres pesos". Mientras que "La gente común y corriente paga 30 a 35% de sus ingresos como impuesto, y somos cautivos" (Entrevista en *La Jornada*, 3 de junio de 2020). Actualmente Buenrostro es Secretaria (ministra) de Economía.

7. De las condonaciones entre 2007-2018, equivalentes a 20,686 mdd. a valores de 2019, 108 empresas concentran el 54 por ciento (v. Decreto presidencial del 20 de mayo 2019). En 2020 y 2021, siete grandes empresas pagaron el equivalente a 2,800 mdd. a cuenta de su deuda, entre ellas: Femsá (Coca Cola-Oxxo), Walmart, Carso (Slim), Alsea (Starbucks, Dominó y otras). En 2022, el presidente denuncia que 20 empresas deben aún el equivalente a 5 mil mdd.

8. En el primer semestre de 2023, los Grandes Contribuyentes pagan el equivalente a 64 mil mdd. La recaudación total (sin ingresos petroleros) es aproximadamente de 130 mil mdd. (Boletín SAT, 21 agosto 2023). Los ingresos tributarios netos son más del 50 por ciento de los ingresos totales del Gobierno Federal (Boletín SAT, 28 de septiembre 2023).

Un caso muy representativo es el empresario Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas). Sólo la empresa Elektra de su conglomerado acumula deudas y recargos por el equivalente a 2 mil mdd., contra lo que ha tramitado amparos y pide el apoyo de la Suprema Corte (se comenta en la *mañanera*). Había obtenido ganancias cuando las transferencias monetarias de los programas sociales se hacían en un comienzo a través de su Banco Azteca (López Obrador pedía que la gente retirara rápidamente el dinero “porque la plata suda”), hasta que con la creación del estatal Banco del Bienestar éste concentró toda la dispersión de las transferencias. Su empresa televisiva es hoy uno de los principales actores de los furibundos ataques contra el gobierno. Salinas Pliego coordinó aquel Consejo Asesor empresarial de los primeros tiempos...

Dos de los objetivos estratégicos son recuperar la soberanía energética y la soberanía alimentaria. La recuperación nacional de Pemex y de CFE condensa el conflicto con las grandes empresas. Se denuncian los negociados de la privatización y el latrocinio continuo porque es el Estado el que financia de manera permanente las ganancias exorbitantes de las empresas privadas. Con la cancelación de contratos se abre un frente contencioso externo. Con el gobierno de España, que defiende a Repsol y OHL, México llegó a declarar una “pausa diplomática”⁹. Con las constantes amenazas del gobierno de Estados Unidos de llevar las controversias a paneles internacionales, se esgrime la cláusula que reconoce la soberanía de México sobre sus energéticos en la nueva versión del tratado trinacional de libre comercio, el T-MEC, firmado por Peña Nieto el último día de su gobierno. Durante la negociación, siendo aún presidente electo, en 2018 López Obrador logró que participaran representantes suyos, y le hizo saber al presidente Trump que, de no aceptarse esa cláusula, con la mayoría simple ganada en el Senado no ratificaría el Tratado (esto lo relató recientemente). Bajo esos términos también se impuso en el T-MEC una cláusula de libertad sindical de los trabajadores mexicanos, con apoyo de los sindicatos estadounidenses y canadienses (cuya solidaridad trinacional viene de los años 1990). En el gobierno de Biden las empresas siguen demandando y amenazando.

9. Desde que gobierna López Obrador, España ha dado la bienvenida y allí residen los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Así como el ex director de Pemex del sexenio pasado, Emilio Lozoya, que fue extraditado de España en 2020 imputado en varios juicios por desvío y malversación de cientos de millones de dólares de la empresa pública, entre ellos 200 mdd. a Odebrecht. Por sus declaraciones se sabe que Odebrecht financió la campaña electoral de Peña Nieto en 2012 y entregó sobornos millonarios a los parlamentarios que votaron la “reforma energética” privatizadora en 2013. En sus declaraciones implicó a otros 70 políticos y anteriores funcionarios; varios de ellos se fueron a vivir a Estados Unidos y a Israel. En esta trama abundan los amparos.

En medio de presiones y negociaciones, en el caso de Pemex, se va revirtiendo el que se exportara petróleo y se importaran gasolinas, diesel y gas a Estados Unidos. Se cancelan o renegocian contratos de exploración. Pemex va recuperando su producción, con la meta de dejar de exportar y llegar a extraer sólo lo que se consume internamente (un millón y medio de barriles) y dejar de quemar gas. La refinería de Deer Park en Texas, que desde 1993 es financiada con recursos de Pemex, es adquirida a Shell en su totalidad en 2021; en un año se recupera la inversión. En cuatro años se construyó la refinería Olmeca en la costa petrolera de Tabasco, que pronto comenzará a procesar crudo, también para la producción de diesel ultrabajo en azufre. Se construyen dos plantas coquizadoras para extraer gasolina del combustóleo, que es altamente contaminante. Y se construyen dos plantas de licuefacción de gas. Además de combatir el robo de combustible de los ductos (*huachicoleo*), que era de 81 mil barriles diarios en 2019 (con comprobada anuencia dentro de la empresa, anteriormente) y se disminuyó a 4 mil en 2023. Todo esto permitió que se den subsidios a las gasolinas para no aumentar precios; la creación de la empresa pública Gas Bienestar de distribución en cilindros a población pobre, que reduce el precio 30 por ciento y condiciona al mercado privado. Además, se recuperan dos abandonadas plantas de producción de fertilizantes. Para hacer efectiva su prohibición del *fracking* en 2019, el presidente tuvo que enfrentar al organismo autónomo Comisión Nacional de Hidrocarburos que hacía valer sus resoluciones previas que lo autorizaban.

En el caso de CFE, el gobierno denuncia: las empresas privadas no pagaban por el uso de la red de transmisión de CFE y tenían prioridad en el porteo de electricidad intermitente, desplazando la generación pública a último lugar pero obligando a CFE a dar el respaldo por intermitencia. Entre las más beneficiadas estaban las estadounidenses Sempra y Talos, la española Iberdrola, la francesa Engie y la mexicana Femsa (Coca Cola-Oxxo). Decía el presidente: “no somos tierra de conquista, que vayan a robar a otra parte”. La aprobación de la iniciativa presidencial de ley sobre la industria eléctrica, en febrero de 2021, desencadena la reacción de las empresas, que son respaldadas por sus gobiernos.

El alud de amparos evidencia la fusión entre gran capital y Poder Judicial. Uno de los promoventes es el Consejo de Litigio Estratégico, creado en 2020, y presidido por Gustavo de Hoyos quien hasta entonces había sido presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y por el empresario Claudio X. González (Kimberly Clark) como presidente de su Consejo

Consultor. Otro promovente es el Instituto Mexicano del Amparo, al que pertenecen dos ministros de la Suprema Corte, hasta el presente. Entre los que se amparan, está el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Forman parte de una red de “asociaciones civiles” (significativamente “ambientalistas”, “contra la corrupción”, de “derechos humanos” y hasta “feministas”) que reciben millonarios financiamientos de la USAID, tal como documentó el presidente antes de enviar una protesta formal al gobierno de Estados Unidos, que también hizo pública. Claudio X. González, articulador de la red “social”, es quien en ese mismo año de 2020 gestó la coalición formal de los partidos de derecha (PAN, PRI y PRD), a la que dirige hasta el presente.

La batalla tiene respaldo social, más cuando estalla la crisis de energéticos por la guerra en Ucrania. Se reducen y congelan las tarifas eléctricas al tiempo que CFE fue rehabilitando seis de sus hidroeléctricas abandonadas (modernización de turbinas, celdas fotovoltaicas flotantes en los embalses de las presas, etc.); construye un enorme parque solar en el desierto de Sonora. En este escenario es que se concreta la compra a Iberdrola, en junio de 2023, de 13 plantas (12 de ciclo combinado y una eólica) por 6 mil mdd. Con lo cual, el Estado recupera el 54 por ciento de la generación de energía eléctrica y el 49 por ciento del mercado del noreste del país (del 6 por ciento que tenía).

Sobre la minería, el presidente denuncia que en tres décadas el saqueo fue mayor al de tres siglos de dominación colonial. A fines de 2019 informa que la revisión exhaustiva de las concesiones mostraba que menos de un 20 por ciento estaba activo, que la mayoría se usaba para la especulación financiera y que, como se les cobra impuestos, han estado devolviendo concesiones; y que su gobierno no ha dado, ni dará, concesión alguna. Dijo, entonces, que no se cancelarían concesiones¹⁰. En 2022 sorprendió con un decreto de nacionalización del litio, y en agosto de ese mismo año con el decreto de creación de la empresa pública Litio para México, con la “exclusividad del Estado en la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral [...] Con lo que se garantiza la soberanía energética de la Nación sobre el litio y demás minerales que resulten estratégicos y necesarios para la transición energética, la innovación tecnológica y el desarrollo [y] la protección

10. Entre 1988 y noviembre de 2018 se entregaron 65 mil concesiones mineras sobre 117 millones de hectáreas (58 por ciento del territorio). De las 25,269 vigentes en 2019, 4.5 mil (18 por ciento) están en explotación sobre 21.3 millones de hás. (11 por ciento del territorio). V. *mañana* 24 diciembre 2019. De las empresas extranjeras, la mayoría es canadiense.

al medio ambiente y derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afroamericanas” (Decretos presidenciales del 20 de abril y 22 de mayo 2022)¹¹. En mayo de 2023, por iniciativa presidencial, una nueva ley de minería modifica radicalmente los términos y tiempos de concesión, además de modificar la legislación sobre aguas nacionales, sobre derechos territoriales, sobre equilibrio ecológico y manejo de residuos, que en caso de incumplimiento avalaría cancelar concesiones. El texto refleja las demandas y debates sociales críticos de varias décadas. Los cuestionamientos vienen de Canadá, Estados Unidos, de la cámara empresarial en México, y se conceden amparos judiciales inmediatamente.

La tensión en el marco del Tratado crece, pues con base en el derecho de libertad de organización, las/os trabajadoras minero-metalúrgicas y automotrices (los más activos hoy), con huelgas en las maquiladoras transnacionales conquistan la mayoría de la representación, desplazan a los sindicatos *charros* *priístas* y anulan sus contratos de protección patronal; tienen fuerte capacidad de presión pues pueden detener los suministros a Estados Unidos.

La recuperación de lo público mediante compras a los perpetradores de estafas a la nación parecería una postura débil, aunque podría alegarse que pueden equipararse a expropiaciones con indemnización. La razón la explica el presidente tiempo después de concretar esas negociaciones: la “catarata” de demandas internas “de quienes mandan sobre el Poder Judicial” y de demandas internacionales. Sólo entre enero y julio de 2023 se presentaron 10 demandas ante el CIADI-BM por unos 12 mil millones de dólares (de empresas mineras, petroleras, financieras, por tierras expropiadas con indemnización, etc.), pero podría ser mucho más: había otras 15 demandas internacionales pendientes hasta junio de 2022, como consigna Manuel Pérez Rocha L. (*La Jornada*, 28 junio 2023).

La recuperación de la soberanía alimentaria es, también, escenario de confrontación con el gran capital. El 31 de diciembre de 2020, el presidente emite el decreto por el que se prohíben el maíz transgénico y el uso de glifosato, determinando que la eliminación gradual del agrotóxico debe concluir el 31 de enero de 2024, y encargando al transformado Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (hoy Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología,

11. En septiembre de 2023 el gobierno canceló nueve concesiones que habían sido entregadas a la empresa china de origen británico Ganfeng Lithium por estar inactivas (no hicieron las inversiones prometidas).

que anteriormente se dedicaba a transferir recursos públicos a las grandes empresas) procurar alternativas agroecológicas a su uso. El decreto recoge la lucha que desde los años noventa encabeza el movimiento Sin Maíz no hay País y la brega crítica de las y los investigadores organizados en la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad¹², precursores de la ecología política. Monsanto-Bayer se ampara; amparos de la cámara empresarial de la agricultura industrial; demandas de Estados Unidos, que vende el 80 por ciento del maíz amarillo importado, todo transgénico. Pese a que en 2023 se decreta la prolongación del tiempo de sustitución del glifosato por tres meses, y que se admite temporalmente la importación de maíz amarillo sólo para forraje, la controversia con Estados Unidos continúa hasta el presente.

Fuerte es la confrontación con el gran capital inmobiliario. Es intensa en zonas urbanas donde los delictivos negocios de los llamados cárteles inmobiliarios público-privados incluso ponen en riesgo a la población (sismos, hundimientos, agotamiento de agua, etc.). El voraz despojo empresarial de tierras y ecocidios en zonas costeras constituye la historia de famosos centros turísticos. Esto se evidenció en su fuerte oposición al Tren Maya, obra federal que implica un ordenamiento territorial que los desplaza o limita. De exclusiva propiedad pública¹³, es construido sobre las vías del antiguo tren del sureste y paralelo a carreteras. Con la privatización de los ferrocarriles se habían eliminado los trenes de pasajeros, expandiendo el negocio de empresas de transporte. El tren, que comunica a toda la península de Yucatán –en el socialmente abandonado sur-sureste–, es eléctrico en parte importante de sus 1,554 kilómetros. Está concebido para, a bajo costo, conectar a pasajeros locales de poblaciones distantes y para que los pequeños productores locales puedan comercializar sus productos; para sustituir el contaminante tráfico de carga; y para promover el turismo comunitario y cooperativo en toda esta península de inmensa riqueza cultural maya –con la ejecución del más grande programa de conservación y restauración arqueológica, y de restauración y conservación comunitaria de selva tropical– que le quita el monopolio a las grandes empresas hoteleras. Son muchos los intereses

12. La UCCS originaria se renombra, tiempo después, como Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza.

13. Se crea una empresa pública para la administración, operación, explotación y actividades de construcción del Tren Maya y de los aeropuertos internacionales que este gobierno construyó, cuya coordinación queda a cargo de la Secretaría (ministerio) de Defensa Nacional (v. Decreto presidencial 13 abril 2022). El presidente argumentó que las utilidades irán al pago de pensiones del personal militar y de empleados del Estado, y que es la única manera de impedir que en un futuro pudieran ser privatizados.

empresariales afectados. Estridentes fueron las movilizaciones de supuestos ambientalistas financiados por las empresas, que conforme fueron exhibidos perdieron eficacia propagandística, aunque continúan los amparos. Otros trenes interurbanos de alta velocidad en construcción, de bajo costo para los usuarios, además de reducir los agotadores tiempos de traslado de trabajadores/as, buscan reducir la circulación de motores contaminantes. El apoyo social es notorio.

En éstas como en las otras obras el financiamiento es público, así como la propiedad; se realizan bajo dirección técnica del Estado y con mano de obra local. Se licitan contratos por obra¹⁴ y cuando las empresas no han cumplido se cancelaron los contratos. Es distinto al modelo transnacional del “nuevo desarrollo” para rescatar al capital financiero de su desvalorización en las crisis, y no está al servicio del extractivismo.

Otros escenarios de enfrentamiento al gran capital

El asalto capitalista al territorio articula a actores formales e informales, a los que el gobierno de la 4T debe enfrentar, teniendo que destinar inmensos esfuerzos humanos y recursos.

El negocio capitalista de la producción y tráfico de droga a Estados Unidos –se comparten 3,200 kilómetros de frontera¹⁵– de larga data en la articulación con gobiernos locales, se reorganizó con la fraudulenta llegada de Felipe Calderón a la presidencia: para legitimarse, lanzó una mortífera “guerra contra las drogas” (cientos de miles de muertos) que en realidad benefició a un cártel contra los otros, operación encabezada por su jefe de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso desde 2019 en Estados Unidos. La Iniciativa Mérida no sólo abrió el territorio a la libre circulación de agentes de Estados Unidos, sino que fortaleció el negocio de armas estadounidense, que fueron a parar al llamado crimen organizado. Primero, de manera formal, con la Operación Rápido y Furioso; y después, de manera informal con el tráfico de unas 200 mil armas por año hasta hoy.

14. Prioritariamente a empresas nacionales, pero entre algunas extranjeras las hay chinas. Las locomotoras y vagones son construidos en México. Tramos fueron construidos por los ingenieros militares.

15. Estados Unidos despojó a México de más de la mitad de su territorio tras la invasión de 1847-1848.

Esos actores informales están vinculados al negocio –a ambos lados de la frontera– del terrible tráfico de migrantes hacia Estados Unidos, que crece exponencialmente (más de dos millones el último año, provenientes de América Latina y el Caribe, África, Asia y hasta ucranianos); otra tragedia humanitaria que bajo una presión creciente atiende el gobierno (albergues, alimentación, atención médica, rescates de secuestrados, de accidentados, etc.)¹⁶.

López Obrador canceló la Iniciativa Mérida; reclama a Estados Unidos que impida el tráfico de armas; rechaza la criminalización de la migración y conmina a que se abran canales legales; enfrenta los chantajes y las provocaciones militares en la frontera. Al tiempo que el presidente dice: “México se respeta. No somos colonia ni protectorado, sino un país independiente, libre y soberano”, procura canales de negociación. Cuando se logran, agradece la “buena voluntad” del presidente Biden; antes lo hizo con Trump.

El despojo de tierra a comunidades indígenas y a ejidos para la expansión de la agricultura industrial, de los talamontes y de la minería a cielo abierto, ha sido ejecutado por las mismas fuerzas paramilitares de esos otros negocios criminales. Por ejemplo, en el estado de Michoacán, cuando el cobro por los servicios paramilitares les resultó inaceptable a las empresas mineras, en 2013 éstas apoyaron la formación de *autodefensas* con armas proporcionadas por el gobierno federal. Coincide con el nombramiento hecho por el presidente Peña Nieto, en diciembre de 2012, del general colombiano Oscar Naranjo como su asesor de seguridad.

Con 70 por ciento de población en pobreza, con la mayoría de jóvenes sin posibilidad de estudiar o trabajar, el cuadro de descomposición social recibido es grave. División en pueblos indígenas y en organizaciones campesinas. Disputas territoriales entre comunidades, algunas de largo tiempo, y otras azuzadas por el paramilitarismo. Ejidatarios que pierden sus tierras y otros que se hacen latifundistas. Poblaciones que apoyan el *huachicoleo* porque reciben bidones de gasolina. Jóvenes *enganchados* por organizaciones delictivas, también en las ciudades. Para el gobierno de la 4T, “la paz es fruto de la justicia, es imprescindible atender las causas”. Lo que se acompaña de una afectuosa prédica del presidente contra los vacíos espirituales del consumismo y la necesidad de rescatar los valores fundacionales de las culturas originarias –lo que desde luego a la clase media “aspiracionista” le molesta– y su llamado a la reconciliación entre el pueblo.

16. La Iglesia católica tiene algunos albergues para migrantes.

Pese a todo: en marcha los objetivos sociales

En 2019, el presidente denuncia la condición en que se encuentra al aparato del Estado, que fue modelado históricamente por el PRI mediante clientelismo y burocratismo y que creó cultura política. “Es un elefante reumático y mañoso echado”. Pasado un tiempo, dice: “Logramos parar al elefante, pero no camina, tenemos que empujarlo”. Recientemente ha dicho: “Bueno, ya está caminando, pero cómo nos costó. Y no camina rápido, camina todavía despacio, las cosas en Palacio [Nacional] caminan despacio; quisiera yo más, y más, y más” (*mañanera* del 2 de agosto de 2023). Pese a todas las dificultades, lo que se realiza marca un corte histórico respecto a los 35 años anteriores.

En 2019, los legisladores del movimiento aprueban varias reformas legales a favor de los/as trabajadores recuperando derechos y libertad de organización, prohibición del *outsourcing* (tercerización), derechos de madres, de trabajadoras/es domésticas, entre otras, con la fuerte oposición de las organizaciones empresariales. Pero la fiscalización a las grandes empresas ofrece información que las presiona a cumplir con el cambio normativo. Tanto en términos impositivos como laborales: la regularización contractual¹⁷, el cumplimiento del mandato constitucional del reparto de 10 por ciento de las utilidades a los trabajadores y, adicionalmente, aporta elementos para presionar a las empresas a aceptar los aumentos salariales que propone el gobierno.

Ya se cuenta con información para un primer balance. El salario mínimo nominal pasa de 88 pesos diarios en 2018 a 207 pesos en 2023, equivalente a unos 355 dólares mensuales (en la frontera norte el mínimo nominal diario subió a 312 pesos). Con una inflación de 5 por ciento en 2022¹⁸, por primera vez tras décadas de caída catastrófica, el salario mínimo real aumenta 90 por ciento (en la frontera norte aumenta 150 por ciento). Con el mayor impacto (80 por ciento) en el decil I de la población; el salario real de la clase media aumenta entre 10-15 por ciento. A julio de 2022 se registraba que habían salido de la condición de tercerizados (*outsourcing*) 2.9 millones de trabajadores; en

17. El fenómeno de las “empresas factureras” que emiten facturas falsas está vinculado al *outsourcing*. En 2020, la Procuraduría Fiscal de la Federación denuncia que tiene listadas a 10 mil empresas que por esa práctica evaden anualmente el equivalente a 25 mil mdd., y un buen número de ellas, nacionales y transnacionales, corresponden al *outsourcing*.

18. A lo que contribuye el acuerdo con las grandes empresas de comercio minorista (de esas a las que se les cobra adeudos fiscales) de precios máximos a 24 productos de la canasta básica.

la empresa matriz su salario aumenta en 29 por ciento las mujeres y 27.4 por ciento los hombres (aunque la brecha salarial de las mujeres es en general de 36 por ciento). El reparto del 10 por ciento de utilidades pasa de 87,600 mdp. en 2018 a 214,217 mdp. en 2022 (unos 11 mil mdd.). Hasta fines de 2022 se habían registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social¹⁹ más de dos millones de trabajadores (totalizan 22 millones). A marzo de 2023 el desempleo es de 2.4 por ciento.

Al mismo tiempo, se produce el renacimiento del campesinado con el apoyo federal a 2.8 millones de familias que trabajan en 7.3 millones de hectáreas (hás.), comenzando por los estados más pobres del país. Uno de los programas es *Sembrando Vida*, de reforestación con 1.2 mil millones de árboles maderables y frutales intercalados con la tradicional milpa, en 1.3 millón de hás., en el que a 455 mil sembradores con 2.5 hás. se les paga un salario mínimo para trabajar sus propias parcelas; se ensamblan en 18 mil *Comunidades de Aprendizaje Campesino*, que con apoyo técnico y social (de 50 mil técnicos y becarios) tienen un vivero, una biofábrica, un sistema de riego y se gobiernan como cooperativa. La *Estrategia de Acompañamiento Técnico* a otros productores se realiza en 4 mil Escuelas de Campo para la transición agroecológica. El programa *Producción para el Bienestar* entrega apoyos económicos y fertilizante gratuito a dos millones de productores de granos básicos (el 83 por ciento tiene predios de 2.5 a 5 hectáreas; el 17 por ciento de 5 a 20 hás.). El gobierno compra gran parte de las cosechas a precios de garantía. Los grandes acaparadores del mercado de granos (Cargill, Gruma y Minsa) hicieron bajar los precios para afectar a los pequeños y medianos productores, y también pretenden que el gobierno les compre a precios de garantía. “No vamos a ceder, no aceptamos chantajes y menos de gente acostumbrada a la corrupción”, responde el presidente. Se realizan obras hidráulicas para consumo humano y riego que benefician a comunidades campesinas e indígenas, como los yaquis, al tiempo que se cancelan concesiones de explotación de agua a grandes empresas en el desértico norte. Se restituye tierras a comunidades despojadas. El programa *Mujeres por Acceso a la Tierra* dio título de propiedad a 5 mil mujeres. También son beneficiados por las acciones en salud y educación.

Durante la pandemia, se informó que había un déficit de 240 mil médicos/as, entre ellos 70 mil especialistas, y de 250 mil enfermeras/os; y que 86 mil

19. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de salud y seguridad social, corresponde a las/os trabajadoras del sector privado. Está, también, el Instituto de Salud y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

trabajadores de la salud no contaban con contratación estable (con base). El presidente denunció, como venía haciéndolo desde antes, que ese es el resultado de décadas del rechazo de las universidades públicas autónomas al ingreso de cientos de miles de estudiantes. La reconstrucción del sistema público de salud pasa por recuperar los dos institutos (el ISSSTE apenas empieza a superar su desmantelamiento). Ya se ha basificado a 50 mil trabajadores/as de la salud. Para atender a 65 millones sin seguridad social (en una población de 130 millones), mediante el sistema *IMSS Bienestar* (en acuerdo con los gobiernos de los estados que aceptan la federalización de sus sistemas de salud, actualmente en 23 estados) se rehabilitaron y equiparon 14 mil centros de atención primaria y 707 hospitales, con atención y medicamentos gratuitos para 53.2 millones. Es un esfuerzo material y humano impresionante. El déficit de personal de salud no se puede resolver a corto plazo, no obstante la expansión de becas para la formación de especialistas. Fundamental es el aporte de los médicos cubanos, contratados pese a la oposición de la derecha; hoy son 850 en los lugares más apartados del país.

Además de nuevas universidades interculturales, destaca la creación de la *Universidad para el Bienestar Benito Juárez García*, con sedes en comunidades que aportan el terreno para su construcción. Con carreras para formar a sus jóvenes en las actividades comunitarias prioritarias, y con especial énfasis en ciencias de la salud. Al 2022 hay 145 sedes (de las 200 programadas) con 50 mil estudiantes, con una primera generación de titulados/as en 2023.

Entre los 150 programas sociales del gobierno federal²⁰, destacan también otros por su amplitud de cobertura en transferencias monetarias. *Jóvenes Construyendo el Futuro* paga durante un año un salario mínimo y atención sanitaria a jóvenes de 18 a 29 años contratados como aprendices en pequeñas y medianas empresas, así como en instituciones públicas; de los 2.6 millones de jóvenes que han pasado por el programa (58 por ciento mujeres), 60 por ciento ha sido contratado de manera permanente. En materia educativa, se basificó (contratación permanente) a más de 800 mil maestros/as. En zonas prioritarias por su rezago social se entrega de manera universal becas a estudiantes desde preprimaria a secundaria; la beca universal a 4 millones de estudiantes de

20. Entre ellos, con impacto entre la población más pobre: construcción de viviendas gratuitas, reconstrucción de las dañadas por los sismos, construcción comunitaria de caminos en municipios aislados, centros culturales y deportivos comunitarios, etcétera. Entre las variadas políticas culturales, el Fondo de Cultura Económica, encabezado por Paco Ignacio Taibo II, ha regalado 6 millones de libros y creado 15 mil clubes de lectura.

media superior; con *Jóvenes escribiendo el futuro* se entregan 400 mil becas para universidades prioritarias (interculturales, la Benito Juárez, normales rurales). Las reciben 12 millones de estudiantes de educación pública. Además de las 80 mil becas de posgrado. Con el programa *La Escuela es Nuestra*, se entregan recursos a 173 mil Comités de Administración Participativa de madres y padres que deciden cuáles necesidades de la escuela atender. Se entregan 1.5 millón de becas a hijos/as de madres trabajadoras, o donde falta un progenitor o los dos. Se entregan 1.3 millón de becas a personas discapacitadas, hasta los 64 años. A partir de los 65 años, se entrega de manera universal una pensión a adultos mayores, que hoy la reciben 12 millones, y que se elevó a derecho constitucional pese a los votos contrarios de legisladores de derecha.

De los 35 millones de hogares que hay en el país, 25 millones reciben uno o más apoyos monetarios de los distintos programas, que llegan al 70 por ciento de la población. Los montos no son elevados pero se incrementan cada año²¹, y resuelven necesidades básicas como la alimentación y el transporte.

Las transferencias monetarias –que junto a los otros Programas del Bienestar en 2023 equivalen a 34,300 millones de dólares– se entregan de manera directa a través del Banco del Bienestar, en 2.5 mil sucursales construidas hasta en las zonas más apartadas²². Con lo que se han ido desmontando el viejo corporativismo priísta y el nuevo corporativismo de “organismos intermedios de la sociedad civil” construido por el Estado neo-oligárquico, que además de su función socio-ideológica capturaba una parte significativa de los montos nacionales e internacionales gestionados.

21. Por ejemplo, la pensión universal para adultos mayores comenzó en 2019 con un valor de 1,160 pesos bimestrales; en 2023 es de 4,800 pesos bimestrales, y será de 6 mil pesos bimestrales en 2024 (equivalente a unos 322 dólares).

22. La construcción de esas sucursales y de varias obras federales se hace bajo dirección de los ingenieros militares, como parte del mandato (*misión*) constitucional de apoyo al desarrollo. Por el mandato constitucional de apoyo social, el ejército ha distribuido 230 millones de vacunas y atención médica en pandemia, distribuye el fertilizante gratuito; además del mandato de atención a emergencias y desastres naturales, junto con la Marina. Son las instituciones públicas con mayor reconocimiento de la población, hasta del 80 por ciento. Contra la diatriba de la “militarización del país”, se dice que es la “ciudadanización de las fuerzas armadas”. Preocupa, desde luego, que cambiaran su orientación actual bajo el mando de un presidente civil distinto como su Comandante Supremo.

Múltiples son las críticas de sectores de clase media: de los desplazados de la gestión –e ingresos– del neocorporativismo; de expertos en políticas públicas por problemas en su ejecución; hay universitarios que defienden el elitismo de sus instituciones contra la más *freiriana* experiencia de la Universidad del Bienestar Benito Juárez. Pocos son los que, conforme pasa el tiempo y las acciones, con honestidad modifican sus posturas.

Pese a la caída de la economía en 2020 (-8.5 por ciento), la mayor en 90 años, los esfuerzos por hacer a la sociedad más igualitaria y justa tienen una cuantificación. Según la *Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de Hogares 2020-2022* (2023) del Instituto de Estadística (INEGI, órgano autónomo), en el período salen de la pobreza 8.9 millones y de la pobreza extrema 1.7 millones de personas. La desigualdad desciende 3 por ciento y desciende la desigualdad entre regiones. En la distribución de ingresos, en 2018 el 66 por ciento iba al capital y 32.9 por ciento al trabajo; en 2021, 58.5 por ciento al capital y 40.2 al trabajo. En la composición de los ingresos de los hogares, el 66 por ciento se origina en el trabajo, y de éste el 84 por ciento es asalariado. Tras la caída de 2020, en 2021 el PIB creció 6.1 por ciento y en 2022 (en plena crisis por la guerra en Ucrania) creció 3.9 por ciento²³. El presidente les recuerda a los empresarios sobre lo benéfico para todos de los aumentos salariales, que no producen inflación, que con la expansión del mercado interno ellos también ganan. Fue muy crítico del aumento de tasas de interés por el autónomo Banco de México, que dio ganancias extraordinarias a la banca.

El presidente agradece la solidaridad de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, de esos “héroes vivientes que el neoliberalismo expulsó”. La emigración de mexicanos se ha reducido considerablemente en estos años. Son 38 millones en Estados Unidos, que aprecian lo que se hace por sus familiares en México y que, con creciente esfuerzo desde la pandemia, sus remesas alcanzaron en 2022 a casi 60 mil mdd²⁴, el mayor ingreso externo, por arriba del petróleo. López Obrador tiene contacto con los migrantes mexicanos

23. Los datos macroeconómicos son positivos. Se revaluó el peso. Se señala que no se contrajo más deuda pública externa; que la deuda pública es un 46.5 por ciento del PIB. Pero con lo que se arrastra de deuda ilegítima u odiosa y el aumento de las tasas de interés, es una sangría criminal: en 2022, por intereses se pagaron el equivalente a 40 mil mdd. Repudiar la deuda ilegítima debería ser un objetivo a concretar hacia adelante.

24. Las remesas representan entre 2.1 y 1.6 por ciento de los ingresos de los hogares de los deciles I a IV; los programas federales representan 14.3 por ciento en el decil I y 5.1 por ciento en el decil IV.

desde hace tiempo, pero como presidente es el primero que los dignifica con un permanente reconocimiento público, aboga por su regularización legal, desarrolla programas para atenderlos en Estados Unidos y en México. Sus músicos son los invitados de honor en las multitudinarias celebraciones de la independencia nacional en la Ciudad de México. Y procura que sean un actor político: ante cada ataque de la derecha estadounidense, convoca a nuestros paisanos a que no voten por quienes irrespetan a los mexicanos.

Es la legitimidad interna la que da autoridad y fuerza a la política exterior (que retoma lo mejor de la tradición en la materia), especialmente en la difícil relación con Estados Unidos. Y hace inteligible lo que desde hace años planteaba López Obrador: “La mejor política exterior es la política interior”.

México está apoyando financiera y técnicamente la ejecución de los programas *Jóvenes construyendo el Futuro* y *Sembrando Vida* en Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice (con 200 millones de dólares), para contribuir a que “la emigración sea una opción, no una necesidad”. Le propuso a Estados Unidos que, en lugar de la criminalización y del gasto en armas, pusiera 1,400 mdd. en esta acción subregional; se comprometió a 400, pero no ha dado nada, según informa el presidente. En 2023, *Sembrando Vida* se lleva a Cuba.

La amistad y cooperación con Cuba (“la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia”, dice López Obrador) ocupa un lugar central en las intensas relaciones de este gobierno con América Latina por declarada vocación martiana. Como lo son con Bolivia tras haberle salvado la vida a Evo Morales, Álvaro García Linera y otros integrantes del gobierno; de haber asilado a miembros del anterior gobierno de Rafael Correa; de haber rescatado a la familia de Pedro Castillo, con suspensión de relaciones diplomáticas con Perú por tenerlo en prisión; la colaboración con la presidenta Xiomara Castro de Honduras. Promoviendo la revitalización de la CELAC; denunciando los criminales bloqueos desde su asiento temporal en el Consejo de Seguridad de la ONU (2020-2021); cuestionando duramente a la OEA; cancelando el presidente su asistencia en junio de 2022 a la IX Cumbre de las Américas en Estados Unidos por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Con la relación de amistad y colaboración con el nuevo gobierno de Gustavo Petro en Colombia, y el respaldo ofrecido al presidente electo Bernardo Arévalo en la actual coyuntura golpista en Guatemala.

Sentando las bases de la transformación

Los avances son inmensos, pero no son suficientes para superar la destrucción. Por ejemplo, para erradicar la violencia. Aunque los delitos del fuero federal han disminuido 24 por ciento en promedio, lo que de por sí es una hazaña, los del fuero común del ámbito de los estados (como asesinatos) disminuyen menos; en los estados gobernados por la derecha incluso aumentaron. Hay enfrentamientos entre grupos delictivos y reacomodados por la detención de jefes. Pero también opera el golpismo híbrido: asesinato de defensores de la tierra, de periodistas, de buscadoras de desaparecidos; hubo que crear un Mecanismo Especial de Protección. Pese a las controversias sobre la creación de la Guardia Nacional, en los territorios reclaman su mayor presencia y la del ejército.

En la decidida acción del gobierno por hacer justicia contra la violación de derechos humanos se topa con los bloqueos del poder judicial, por acción u omisión, y con bloqueos de las fiscalías en las que siguen incrustados funcionarios afines a gobiernos anteriores. El presidente ha tenido que recurrir a amnistiar a presos y presas injustamente encarcelados o con décadas sin proceso ni sentencia. Hay obstáculos y bloqueos a las avanzadas investigaciones de las Comisiones de la Verdad creadas desde presidencia: la de violaciones a derechos humanos entre 1965 y 1990, y la del caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. La Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa ya ha dado pruebas y afirmó que fue un “crimen de Estado”²⁵. A su presidente, el Subsecretario (viceministro) de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el histórico militante de izquierda Alejandro Encinas, la Suprema Corte le acaba de imponer censura a sus declaraciones.

Cuanto más se hace, más va evidenciándose lo que falta por hacer. López Obrador definió con mayor precisión: “Estamos sentando las bases de la transformación”. Que es “la primera etapa de la Cuarta Transformación”, de un proceso que requiere mucho más tiempo para sacar al país de “la decadencia en que lo dejaron; decadencia, no sólo crisis”. Y que exige “no zigzaguear”, “no correrse al centro”, “porque cuando se quiere dar gusto a todos, no se da gusto a nadie”, dice.

25. Con incontables obstáculos, se logró detener al Procurador General de la República de entonces y a más de 20 militares implicados, entre ellos dos generales, entre 160 detenidos (un juez liberó a 60); se pide la extradición desde Israel del entonces jefe de la Agencia de Investigación federal. Hay una permanente búsqueda de los estudiantes desaparecidos asesinados.

Resta todavía un año de gobierno, con aceleración para culminar lo que está en curso, y seguramente habrá sorpresas. El presidente promete un listado de lo que considera habría que hacer en la siguiente etapa, pero ya adelantó que en lo laboral urge mejorar el salario de los trabajadores públicos y enfrentar “la infamia de modificar el sistema de pensiones y entregar los fondos a las Afores, a los bancos”.

Plan C

Para avanzar en los cambios es imprescindible eliminar los impedimentos legales y bloqueos institucionales, y eso sólo se lograría con profundas reformas constitucionales, para lo que se necesita contar con mayoría parlamentaria calificada, de 2/3. Ese es el “Plan C”, el código ya socializado por el presidente para eludir la censura a que se lo somete, que sintetiza la tarea política fundamental. Su origen: en abril de 2022 envió una iniciativa de reforma constitucional del nefasto sistema electoral, que fue rechazada; era previsible por no contar con mayoría calificada, pero cumplía con la tarea de politización, porque “no puedo ser cómplice” (presidente *dixit*). Inmediatamente envió una iniciativa de reforma a leyes secundarias (el “Plan B”) que con la mayoría simple se aprobó en diciembre de 2022. Tras más de cien amparos, la Suprema Corte la invalidó en marzo de 2023. El “Plan C”, el llamado a que además de ganar la presidencia en junio de 2024 se vote por los parlamentarios del movimiento, concentra su fundamentación en la necesidad de una profunda reforma al Poder Judicial, un objetivo ya entendido y demandado popularmente.

Tras casi cinco años, el presidente López Obrador cuenta con una alta aprobación. Las encuestas encargadas por la derecha le reconocen 62 por ciento, pero otras nacionales e internacionales registran un 68-70 por ciento. La derecha, que lo acusa de “populista”, lo atribuye al “asistencialismo”. Desde luego que esa gran mayoría de empobrecidos expresa gratitud por el cambio en su condición de vida. Cabe interrogarse si eso expresa, también, mayor politización.

Para poder atisbarlo hay que encontrar signos de efectividad de la furibunda guerra de espectro total de la derecha. Uno podría ser su capacidad de movilizar masas con su convocatoria explícita²⁶. Tratan de hacerlo contra “la dictadura”,

26.- Pese a buscar ocultarlo, se ha demostrado que financian a grupos de choque y provocadores que se infiltran en manifestaciones y acciones callejeras por demandas sociales legítimas.

en defensa de su bunker autónomo. Apenas constituido el Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaa) en 2020, “asociación civil” dirigida por el empresario Gilberto Lozano (Femsa), sus ralas manifestaciones y su ocupación del Zócalo de la Ciudad de México durante un mes con tiendas de campaña, terminó en ridículo cuando se volaron. Empero, en febrero de 2023, contra el “Plan B” y bajo la consigna “el INE no se toca”, la red “social” coordinada por Claudio X. González movilizó a unos 50 mil manifestantes en la capital, en su mayoría de clase media y alta, con menor participación en los estados. Pero en mayo de 2023, la manifestación por “la Corte no se toca” sólo movilizó a pocos miles. En agosto de 2023, las movilizaciones contra la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos de primaria y secundaria, porque “inoculan el virus del comunismo” y “atentan contra la moral”, fueron convocadas por la ultraconservadora Unión Nacional de Padres de Familia y jefes de la Iglesia católica, llamando incluso a la quema de libros (ocurrió en un pueblo indígena en Chiapas); si bien se realizaron en todo el país, fueron poco concurridas. Presentaron más de mil amparos y avalados por la Suprema Corte. Pero donde no se repartieron los libros surgieron inéditos movimientos de maestros, madres y padres exigiendo su distribución.

En lo electoral, la coalición de partidos de derecha exhibe pérdida de influencia. En 2018, Morena (Movimiento de Regeneración Nacional²⁷) conquistó cuatro gubernaturas con sus aliados, los pequeños partidos del Trabajo y el Verde; en 2023 gobierna en 23 estados (de 32), sobre el 71 por ciento de la población local. La coalición se llamó en 2018 Juntos Haremos Historia; ahora se llama Juntos Hacemos Historia. Es indudable el peso de López Obrador en estos resultados; pero no es una influencia mecánica, pues está mediada por el desempeño partidario, por las alianzas y por las candidaturas que se presentan.

Es veloz la historia de Morena: creado por López Obrador y militantes de la izquierda histórica como asociación civil en 2012, se pensó como un movimiento para un cambio de cultura política y ética. Lo primero que hicieron fue crear una estructura de base territorial con los llamados Comités de los Protagonistas del Cambio Verdadero. En 2014 obtuvo el registro como partido, al que se integra un heterogéneo conglomerado de fuerzas y personas que buscan cambios. En 2018 triunfa con una política de amplitud que incorpora a algunos recién salidos del PRI y del PAN, lo que generará problemas

27. Evoca al periódico *Regeneración* de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución de 1910.

(varios ya se fueron). Desde 2019, el 90 por ciento de sus dirigentes y 40 mil de sus militantes pasaron a funciones públicas (legislativas y de gobierno). Con la constante tarea electoral en estos años, muy eficaz, queda subsumida la maduración del partido. También por el injerencismo que la legislación otorga al INE y al Poder Judicial, que incluso lleva a la judicialización de procesos internos del partido. En junio de 2024 será la elección más grande de la historia disputando la presidencia, nueve gubernaturas y 20 mil cargos de representación federal, estatal y municipal. La relación entre amplitud y profundidad es ya una preocupación.

Para la próxima elección presidencial, las encuestas le otorgan hoy un apoyo mayoritario a Morena y sus aliados, que sólo una catástrofe podría revertir, pues la coalición de los partidos de derecha no pasa del 20-30 por ciento de respaldo. Con un fenómeno interesante que podría dar cuenta de un proceso de politización: en septiembre de 2023, mediante 12.5 mil encuestas a población abierta, realizadas por seis encuestadoras espejo, entre los seis aspirantes a la futura candidatura presidencial de la 4T, con amplia mayoría fue elegida Claudia Sheinbaum²⁸, la de trayectoria de izquierda más genuina y garantía de continuación de los cambios.

López Obrador ha anunciado su retiro total de la vida pública a fines de 2024. Es constatable el sentimiento de duelo que ya provoca, pues ha hecho historia.

Este texto se terminó de elaborar en Ciudad de México en octubre de 2023.

La autora es Profesora-Investigadora del Departamento de Política y Cultura, Área Problemas de América Latina, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México.

28. Claudia Sheinbaum es física e ingeniera en energías alternativas, proviene del movimiento universitario de los años ochenta, militante de izquierda y con experiencia de gestión: primero en el gabinete de López Obrador en la capital (2000-2006), luego al frente de una de las alcaldías, y como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México desde 2018 hasta su renuncia en septiembre de 2023. En la ciudad se realiza una gran obra en nuevos centros educativos y becas universales, formación en ciencias de la salud y en atención sanitaria, economía social y solidaria, transporte alternativo, cultura, de derechos, especialmente de mujeres. Con importante reducción de los llamados delitos de alto impacto.

Este libro se ocupa del análisis, desde diversas perspectivas del pensamiento crítico, de experiencias de gobiernos de Nuestra América calificados genéricamente como progresistas, pero muy heterogéneos en cuanto a sus condiciones histórico-concretas de origen, contenidos y alcances, trayectorias y configuraciones de conflictividad, nivel de respuesta frente a las tendencias a la crisis capitalista y a las demandas sociales, rasgos específicos de la gestión gubernamental, relacionamiento con los Estados Unidos, proyección regional y global, y rol del movimiento social y popular, entre otros.

Con los casos examinados, se pretende contribuir a una mejor caracterización del momento político que atraviesa la Región y, además, suministrar elementos de análisis para la comprensión de los proyectos políticos progresistas que se encuentran actualmente en el gobierno (México, Bolivia, Brasil, Colombia y Chile), o que gobernaron hasta hace poco (Argentina).

Tales proyectos, al tiempo que pueden ser leídos dentro de una línea de continuidad de la trayectoria del proceso político iniciada en el fin del siglo pasado, revelan nuevas condiciones producto de más de dos décadas de intensificación de las disputas por la (re)configuración de las relaciones de poder en el ámbito nacional-estatal y en la dimensión geopolítica regional. Esas condiciones evidencian que no ha sido posible consolidar de manera estable una senda del cambio estructural y la transformación social conducente a la superación de la forma capitalista neoliberal predominante, y más allá, a la habilitación de condiciones políticas, sociales, culturales y ambientales para procesos de transición hacia la negación misma del capitalismo como formación social.

